



Pedro Torres Ciliberto: la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora

Descripción

La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños —Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro— en manos de inversionistas que hasta entonces se consideraban cercanos al régimen chavista. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico al que se le suele vincular, por vía de la amistad, con el ex vicepresidente y ex ministro de Defensa, José Vicente Rangel.

En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles, operación a la que se alió Julio Herrera Velutini, quien acababa de adquirir el Helm Bank y el Banco Real.

Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran.

La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas.

El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos —a puertas abiertas—, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarán a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario.

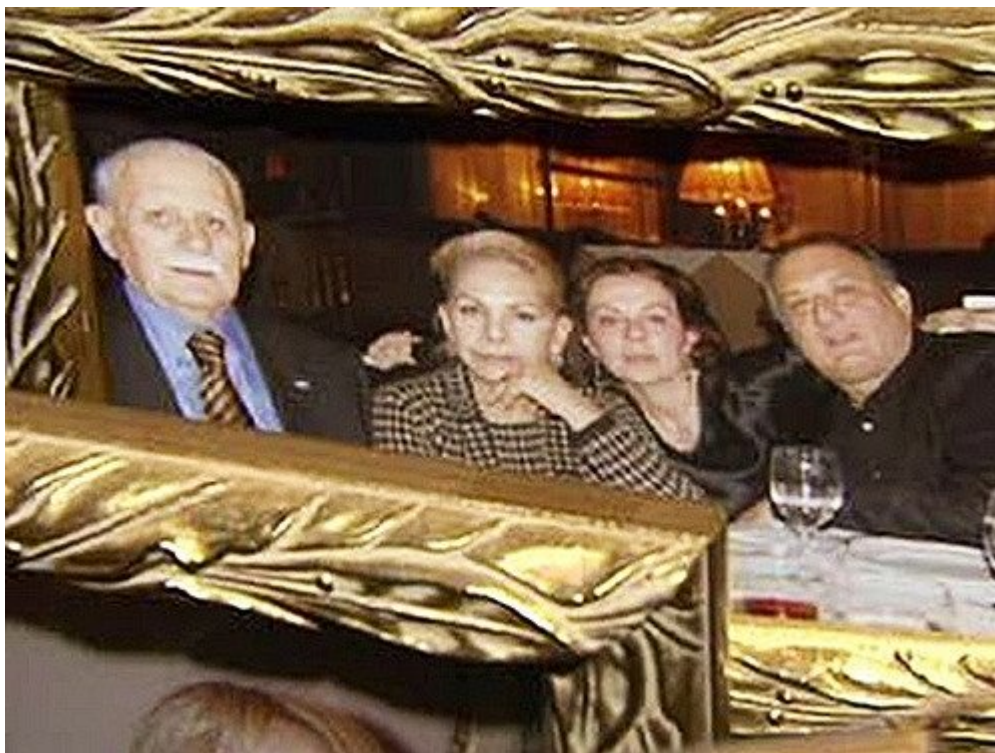
El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía.

La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros —algo que no se consumó— y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró de utilidad pública las acciones de la compañía.

Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas para Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora.

Contacto en Galicia

Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas.



En la primera década del siglo XXI la mayor accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirenses fundadora de La Previsora —y también propietaria del histórico Hato El Frío

del Alto Apure, hasta su confiscaci3nâ??, con un grupo de socios que incluÃa a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol.

En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguiÃ³ una labor de compra de acciones que lo llevÃ³ a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, asÃ como de otras personas jurÃdicas del conglomerado financiero de La Previsora, a travÃs de las que llegÃ³ a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquiriÃ³ a la familia Saleh.

Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, saliÃ³ nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto.

En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway â??empresa propietaria, a su vez, de la mayorÃa accionaria de Seguros La Previsoraâ?? dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compaÃ±a de Pedro Torres Ciliberto, registrada en PanamÃ; en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse habÃa realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con tÃtulos de deuda venezolanos denominados en dÃ³lares, de las acciones de Freeway.

Como se verÃ¡ despuÃs, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurÃdico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderarÃ de La Previsora. Pero sÃ es una de las razones que explica por quÃ un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacci3n.

En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto dÃa, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, JesÃs Alberto Abilahoud, reconocido compaÃ±ero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una direcci3n en la capital gallega de A CoruÃa.

Un aÃ±o mÃs tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel MariÃ±o GonzÃlez, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 MariÃ±o suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation.

Â¿A quÃ se debÃa la galleguizaci3n de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayorÃa accionaria de Seguros La Previsora?

La clave estÃ en la incorporaci3n de un nuevo actor en la trama, JosÃ Fraga.

Fraga, abogado y asesor espaÃol, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de EspaÃa y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista AmÃrica EconomÃa lo presentarÃ como lÃder de un grupo de inversionistas espaÃoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendÃa comprarle a JosÃ MarÃa Nogueroles una participaci3n importante del Banco Nacional de CrÃdito (BNC). Fraga, segÃn anticipaba la publicaci3n entonces, iba a mantener â??una posici3n puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos aÃ±osâ?.

Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el título de "Estrictamente Confidencial", estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevaría adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora.

El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendría, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger "los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA".

Hoy más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de "estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas".

Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora.

En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd.

Como pagar y darse el vuelto

Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense.

Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debía completarse.

En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parientes corporativas "Lionesse o Freeway" aparecen como clientes de MF.

El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL.

Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez.

En 2010 ¿esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela? el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga ¿para su cliente? una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A.

Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecerlas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución ¿a la carta? Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento ¿Corporations? de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de ¿adquisición? para Brookline Business S.A.: ¿2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional?.

Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registró en Florida una Brookline Business C.A.

A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business ¿la recién incorporada empresa panameña? una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 hectáreas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisia 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita.

Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas.

Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febrero de 2014.

Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes.

Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbency Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation.

El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen ¿miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelf companies?, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un ¿Contrato de Préstamo Participatorio? con Banreal Holding SLU, una empresa

registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa don Pedro Torres Ciliberto en calidad de Administrador Solidario.

Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción.

En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca a Brookline Business.

Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd.

El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podrá pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuela se le pagará a la Prestamista, es decir, a Brookline Business, la indemnización que cobre por dicha expropiación.

Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición.

Fecha de creación

2016/04/04